



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

### SENTENCIA DEFINITIVA

**EXPEDIENTE NRO: 4375/2023**

**AUTOS: "IMAGEN SATELITAL S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA"**

Buenos Aires,

### VISTOS Y CONSIDERANDO

Que surge de las actuaciones que por Resolución N°2021-516-E-AFIP del 31/8/2021 se hizo lugar parcialmente a la impugnación presentada por la contribuyente y dejó sin efecto la determinación de oficio efectuada respecto del trabajador Adolfo Ricardo Alanis por los períodos 3/2002 a 7/2006. Por otra parte dicha resolución confirmó la deuda por capital, intereses y multa por los períodos 8/2006 a 2/2014 conforme las actas de infracción e inspección labradas en virtud de la O.I 1.602.979.

Que contra dicho decisorio se dirigió recurso de reconsideración que fue desestimado con fecha 6/6/2022 mediante RESOL-2022-1189-E-AFIP. Al momento de notificar la misma se le informó a la actora que con el dictado de la misma se agotaba la instancia administrativa.

Que el 12/8/2022 la contribuyente deduce recurso de apelación ante esta Alzada por lo que al momento de ser elevadas las actuaciones la AFIP informa que la misma abono la totalidad de la suma reclamada. Por ello, y atento que se encuentra cumplido el requisito dispuesto en el art. 15 de la ley 11683.

Que despejados los óbices formales a la procedencia del remedio intentado, cabe circunscribir el examen a la cuestión litigiosa a resolver esto es –más allá de las cuestiones desarrolladas en su libelo de agravios-, en primer lugar, si se encuentra o no prescripta la acción ejercitada por el organismo para percibir los aportes y contribuciones reclamados.

Que surge de las actuaciones que el organismo determinó la deuda por aportes y contribuciones, intereses y multa en virtud de las actas labradas bajo ala O.I 1.602.979 respecto del Sr. Adolfo Ricardo Alanis en concepto de " empleado no declarado". El propio denunciante habia promovido demanda laboral contra el contribuyente que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°17 en los autos " ALANIS ADOLFO RICARDO C/ IMAGEN SATELITAL S.A S/ DESPIDO" expte N° 46026/2014 cuya sentencia de primera instancia le fue favorable al Sr. Alanis y luego, apelada la misma en segunda instancia se presentó un acuerdo conciliatorio entre las partes que fue homologado por la Sala V de la Excma Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Que primeramente debemos avocarnos al tratamiento de la defensa de prescripción opuesta. En este sentido cabe aclarar que, sin perjuicio de la entrada en vigencia a partir de 1.08.2015 del Código Civil y Comercial da la Nación aprobado por la ley 26.994 (art. 1 de la ley 27.077), en atención a los períodos fiscales reclamados en el *sub lite* y la noción de consumo jurídico, habrá de juzgarse en cuanto resulte pertinente por las normas del Código Civil ley 340 y sus modificatorias (cfr. CSJN *in re*: CSJ 4930/2015/RH1 "Volkswagen de Ahorro para Fines determinados S.A.c/Provincia de Misiones –Dirección General de Rentas y otro s/demanda contencioso administrativa", del 5.11.2019).

Que tal como ha sostenido el tribunal en casos análogos al presente (Ver sentencia definitiva N° 111693 del 20.3.06 en la causa 13516/05 "Maitor SRL c/AFIP-DGI s/impugnación de deuda"), que el organismo cuenta con amplias facultades de control y fiscalización cuyo ejercicio es independiente del accionar de los particulares afectados. En efecto, aún sin que medie denuncia del trabajador o sentencia judicial que reconozca el carácter laboral de una relación, es común que la AFIP labre actas y formule cargos contra presuntos empleadores deudores, de modo que el fraude que este pueda cometer no constituye un impedimento para su accionar. Por lo demás, en caso de mediar cuestionamiento del administrado contra la resolución que desestimó su impugnación, compete a este Tribunal resolver sobre el fondo del asunto, aunque para ello sea necesario dilucidar si corresponde admitir o excluir del ámbito del derecho laboral a la relación jurídica habida entre las partes.

Que en lo que hace al cómputo de la prescripción liberatoria habrá de recordarse lo dispuesto por el art. 4017 C.C. –vigente al tiempo en que se devengó la obligación de pago-, en cuanto alude al tema en los siguientes términos: "por solo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obligación. Para esta prescripción no es preciso justo título ni buena fe". De ello se desprende



que la eficacia de la prescripción “es independiente de la buena o mala fe del deudor”, como afirma Llambías en el Tratado de Derecho Civil - Obligaciones III, Ed. Perrot, pág. 311, quien agrega: “A diferencia del derecho canónico en que la prescripción sólo es alegable por el deudor de buena fe..., en nuestro derecho ese es un factor irrelevante”, ponderando ese criterio legal “por cuanto el fundamento de la prescripción es la utilidad social que resulta igualmente servida, aunque el deudor tenga conciencia de la subsistencia de su deuda, o sea tenga mala fe”.

Que entonces, el cómputo para las acciones por cobro de aportes, contribuciones, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsionales se produce a los diez años de su devengamiento con arreglo a lo dispuesto por el primer párrafo del art. 16 de la ley 14236, de manera que, en el sub examine, resultan alcanzadas por la excepción los créditos originados con anterioridad a los diez años previos al reclamo.

Que en otro orden señalamos que la conducta del acreedor no es ajena al vencimiento del plazo de la prescripción liberatoria, puesto que -como ocurre con habitualidad- en ejercicio de sus facultades de fiscalización y verificación, bien pudo haber promovido el reclamo que ahora persigue en tiempo oportuno con prescindencia de la existencia o no de una causa judicial interpuesta por el trabajador. En otras palabras, no ha sido acreditado que el organismo recaudador ejerció en debida forma las atribuciones que le son propias o que, habiéndolo hecho, no pudo llegar a un resultado acertado en virtud del ocultamiento del empleador (C.N.Civ. Sala C, 6.5.86, L.L. 1987 - A - 241 y E.D. t. 119 pág. 265).

Que en síntesis, sin que ello importe alentar actitudes evasivas de los obligados al depósito de aportes y contribuciones, considero que la aplicación del derecho vigente a las constancias de la causa, cimentado en la preservación del valor de seguridad jurídica al que apunta el instituto de la prescripción liberatoria, no permite hacer excepción a la reglas contempladas por el citado Código cuyos alcances, en cuanto aquí interesa, no han perdido virtualidad a partir de la reforma aprobada por ley 26.994.

Que por lo arriba expresado, corresponde hacer lugar parcialmente a la prescripción opuesta por los créditos reclamados por los períodos anteriores a los diez años previos al 23/8/2018 fecha en la que los instrumentos que dieron origen a las presentes actuaciones fueron notificados a la actora. De tal modo, se declaran prescriptos los créditos devengados con anterioridad al 23/8/2008.

Que como consecuencia de ello, en atención a que el período reclamado por la AFIP al contribuyente es 8/2006 a 2/2014 conforme surge de la resolución N°516-2021 del 31/8/2021, y la admisión parcial de la defensa opuesta, dejamos establecido que la deuda intimada se mantiene por el período no prescripto, es decir de 8/2008 a 2/2014.

Que respecto del agravio sobre la existencia de la cosa juzgada, consideramos que la misma no puede prosperar. Ello es así pues el instituto de la cosa juzgada procede y tiene efectos para quienes fueron parte en el acuerdo homologado por la justicia laboral y respecto de la indemnización por despido. Ello no puede alcanzar a la AFIP que no fue parte en dicho acuerdo y que tiene como finalidad específica perseguir el cobro de aportes y contribuciones que debieron haber sido retenidos y abonados durante el lapso que duro la relación de trabajo.

Que a mayor abundamiento cabe señalar, respecto del citado acuerdo que: “Si un derecho ha sido afirmado o negado en un proceso, habrá identidad de objeto a los efectos de la cosa juzgada si en uno nuevo se pone en cuestión el mismo derecho, aún cuando sea para sacar de él otra consecuencia que no hubiera sido deducida en el proceso originario, (CSJN in re “Sánchez de Oesterheld, Elsa Sara y otros c/ Ediciones Record S.A. s/ nulidad de marca”, S. 142. XLVIII. REX10/07/2018, Fallos: 341:774), lo que no acontece en autos.

Que respecto a las restantes cuestiones alegadas que no han sido expresamente abordadas, cabe recordar que “los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio”, (cfr. “Tolosa, Juan C. c/Compañía Argentina de Televisión S.A.”, fallado el 30.4.74, pub. L.L. T. 155, pág. 750, nro. 385). Ello es así en el marco de la conocida doctrina en virtud de la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los argumentos que, a su juicio, no sean decisivos para decisión de la causa. (Fallos 272:225; 274:113; y causa “Wiater c/Ministerio de Economía”, L.L. 1998AA, pág. 281, y más recientemente Fallos 325:1922, entre otros).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

Que por lo expuesto, y en atención al deposito previo efectuado por la actora para acceder a esta Alzada, se ordena la devolución del mismo por el período prescripto para lo cual el organismo deberá reliquidar la deuda y excluir los mismos. A la suma resultante a favor del actor se deberá agregar el interés que resulte de aplicar la tasa pasiva para el uso de la justicia que publica el BCRA.

Que por lo expuesto el Tribunal **RESUELVE** : 1) Hacer lugar parcialmente a la defensa de prescripción opuesta por la recurrente por los créditos devengados con anterioridad a los diez años previos al reclamo; 2) Desestimar la defensa de cosa juzgada; 3) Ordenar al organismo demandado que reliquide la deuda y multa impuestas con exclusión de los créditos prescriptos por los periodos indicados precedentemente; 4) Ordenar la devolución la devolución de las sumas depositada en cumplimiento del requisito de pago previo con más el interés que surja de aplicar la tasa pasiva BCRA con los alcances indicados; y 5) Sin costas en la Alzada (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 10/25 y, oportunamente, remítase.

**SE DEJA CONSTANCIA QUE LA DRA. NORA C. DORADO NO SUSCRIBE LA PRESENTE POR ENCONTRARSE EN USO DE LICENCIA. (ART. 109 del R.J.N)**

